

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE LETRADOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, de 25 de octubre de 2021. BOE núm. 265, de 5 de noviembre de 2021).

CUARTO EJERCICIO

Con fecha 9 de noviembre de 2021 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal de Cuentas, escrito firmado por Don Evencio C. D., (ECD) funcionario jubilado perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores del Estado y vecino del municipio de Valdenovillo del Valle, (en adelante, VV), que cuenta con una población de derecho de 9.464 habitantes, en la provincia de Cáceres, dirigido a la Presidenta del Tribunal, en el que, actuando en su propio nombre y derecho, ponía en conocimiento del Tribunal determinados hechos, actos u omisiones acaecidos en el citado Ayuntamiento en que reside, tanto en el presente año como en anteriores ejercicios, que, a su juicio, podrían indiciariamente haber producido algún tipo de daño o perjuicio a las arcas públicas locales, y del que deberían responder los responsables de la gestión municipal, (Alcalde, Interventor Local y Tesorera local), los miembros del Pleno corporativo, con el detalle que se dirá, así como las sociedades mercantiles Servicios de Oficina., S.L. (SO, S.L.) y ZX, S.A., que, respectivamente, resultaron adjudicataria la primera de varios contratos irregulares, y la segunda perceptora de una subvención indebidamente justificada.

El escrito venía acompañado de diversa documentación acreditativa de los hechos denunciados y en el mismo manifestaba:

Primero.- Que, con fecha 22 de octubre de 2021, Don ECD, en su propio nombre y derecho, había presentado en plazo reclamación administrativa contra el Acuerdo del Pleno del ayuntamiento de VV, de 15 de octubre de 2021, por el que se aprobó inicialmente el presupuesto general de la corporación, al amparo de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Los motivos que sirvieron de base para tal impugnación fueron los mismos que ya esgrimió en su reclamación anterior, de fecha 28 de diciembre de 2020, contra el Acuerdo plenario de aprobación definitiva del presupuesto general de la corporación, de fecha 22 de diciembre de 2020, (no haberse ajustado su elaboración y aprobación a todos los trámites previstos en el mencionado TRLRHL, en concreto, no haberse unido al presupuesto el Anexo de personal de la entidad local, así como la omisión de determinados créditos necesarios para el cumplimiento de determinadas obligaciones exigibles a la entidad y la insuficiencia de determinados gastos presupuestados respecto a las necesidades para las que se hallaban previstos, entre otros, los destinados a sufragar las obras de mantenimiento de la pavimentación de las aceras públicas de la localidad, que presentaban un manifiesto estado de deterioro).

Señalaba también que su reclamación, contra el Acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto general de 2020 había sido desestimada por Acuerdo del Pleno corporativo de 31 de diciembre de 2020, y que contra dicho Acuerdo interpuso en su día recurso contencioso-administrativo que, a fecha su escrito, se hallaba pendiente de resolución firme.

Razonaba, además, que, en caso de que el presupuesto general de la corporación llegara finalmente a ser aprobado con la referida insuficiencia de dotación crediticia, podría resultar lesionado su derecho a participar en la gestión municipal amparado por la normativa local, así como el derecho a la utilización de los servicios públicos municipales, en particular, el relativo a la exigencia de la prestación y establecimiento de los servicios públicos a que está obligada la corporación de VV, en tanto se trata de competencias propias de carácter obligatorio cuyo ejercicio no puede eludir la misma, (art.18 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

Concluía señalando que estos hechos podían dar lugar a un menoscabo o perjuicio de fondos públicos de la Corporación contrario a la normativa presupuestaria aplicable en el ámbito local, en particular, a las previsiones del TRLRHL, sobre elaboración y aprobación de los presupuestos de las Entidades Locales, que cuantifica en un importe de 25.000 euros, y del que deberían responder contablemente de modo directo los miembros del Pleno de la Corporación que votaron a favor de la aprobación inicial del presupuesto general de 2021, y aquellos que votaron en el mismo sentido a favor de la aprobación definitiva del presupuesto general de 2020. De forma subsidiaria, también sería responsable contable el Secretario-Interventor municipal, habida cuenta que, en sus respectivos Informes económico-financieros, que preceptivamente acompañaban al presupuesto, no advirtió acerca de la acreditada insuficiencia de créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios al no formular objeción o reparo alguno a los referidos Acuerdos plenarios de aprobación de los presupuestos generales de ambos ejercicios, 2020 y 2021.

Segundo.- En fecha 17 de junio de 2021 el Ayuntamiento de VV celebró cuatro contratos menores con la mercantil Servicios de Oficina, S.L., por importe de 9.500 euros cada uno para el suministro de diverso material de oficina al Ayuntamiento, recibándose el material en la corporación el día 30 de junio de 2021.

La celebración de los contratos señalados puede constituir un fraccionamiento contractual contrario a la ley de contratos del sector público, con el fin de eludir los requisitos de publicidad y concurrencia exigidos por dicha normativa, y ha dado lugar a una salida de fondos públicos locales prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, que resulta constitutiva de un alcance de los caudales del Ayuntamiento por un importe de 38.000 euros.

La responsabilidad contable directa ha de atribuirse al Alcalde quien ordenó el pago, y asimismo tal responsabilidad contable directa, o, al menos la subsidiaria, al Secretario Interventor municipal, Don MFA y a la Tesorera municipal, Doña PFF, también claveros

de la corporación, el primero por no haber opuesto reparo alguno al pago, y la segunda por ejecutar sin más la orden recibida.

Tercero.- El Ayuntamiento de VV concedió, por resolución de Alcaldía, de fecha 14 de mayo de 2020, a la sociedad anónima ZX, S.A. una subvención por importe total de 35.000 euros, con objeto de que asumiera la organización de los actos socio-culturales y deportivos programados con ocasión de las fiestas patronales de la localidad.

El pago se ordenó con fecha 5 de junio de ese año y en las bases reguladoras de la subvención se fijó el día 20 de diciembre del mismo año como fecha límite para que la entidad beneficiaria justificara la subvención. La empresa ZX, S.A. organizó los actos socio-culturales, y recreativos en la semana de las fiestas locales conforme a lo previsto, pero el día 20 de diciembre de 2020 no había presentado documentación justificativa alguna. Entre dichos eventos estaba prevista la celebración del tradicional campeonato de fútbol sala que finalmente no pudo llevarse a término, aduciendo la empresa beneficiaria de la subvención, que incluía, entre las actividades financiadas, la organización de este torneo deportivo, (el coste estimado del mismo ascendía a un importe de 6.000 euros respecto al montante total de la subvención), que su anulación se debió al deficiente estado de las instalaciones, que pudo acreditar mediante informe técnico de un profesional, que comprometía la seguridad de participantes y de público, y cuya conservación incumbía al ayuntamiento.

Estos hechos han originado un alcance en los fondos públicos de la corporación por un importe de 35.000 euros, del que deberían responder contablemente de forma directa el Alcalde del Ayuntamiento, como ordenador del pago, y la mercantil ZX, S.A., en tanto perceptora de la subvención.

Cuarto.- Con fecha 13 de enero de 2016, el Juzgado de lo contencioso-administrativo competente dictó sentencia en primera instancia, declarando la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de VV, por diversas lesiones ocasionadas a Doña EFH, persona de avanzada edad residente en el municipio, como consecuencia de una caída producida por el mal estado de la pavimentación de una acera de la localidad. El fallo de la mencionada sentencia, contra la que el Ayuntamiento de VV no interpuso recurso alguno, condenó al Ayuntamiento a indemnizar a la misma con una cantidad de 3.650 euros en concepto de resarcimiento de los daños ocasionados, los cuales fueron abonados a dicha Señora en virtud de orden de pago del Alcalde, de 22 de febrero del mismo año.

Dicha salida de caudales públicos de las arcas de la corporación de VV podría haber ocasionado un menoscabo en los fondos públicos municipales por el importe de 3.650 euros a que ascendió la indemnización, y del mismo debería responder contablemente el Alcalde de la corporación, quien, no sólo actuó de forma negligente en el cumplimiento de sus obligaciones al permitir el deterioro de un bien de uso público local, que finalmente fue el que desencadenó la producción de los hechos lesivos, sino que, inmediatamente, y sin solicitar asesoramiento alguno, ordenó el abono de la indemnización dirigida al resarcimiento de los daños ocasionados, descartando la

promoción de las posibles acciones oportunas en defensa de los intereses de la corporación, máxime teniendo en cuenta la ausencia de uniformidad en la interpretación de la procedencia de este tipo de indemnizaciones en las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en casos similares.

Quinto.- Con fecha 7 de abril de 2021 se celebró el último ejercicio del proceso selectivo para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de funcionario del grupo A, Subgrupo A2, en la Corporación. Las bases de la convocatoria establecían, para ser admitido en el mencionado proceso, que las personas aspirantes debían poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, entre otros requisitos, el de titulación consistente en estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Grado, Licenciatura o Doctorado en Relaciones Laborales o en Derecho.

Don AGH superó dicho último ejercicio y resultó seleccionado por el Ayuntamiento, tomando posesión, una vez nombrado, de una plaza dotada presupuestariamente en la Concejalía de Educación y Juventud del consistorio, el día 30 de abril de 2021, desempeñando desde entonces las funciones inherentes a dicho puesto y percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que ascendían a 2.850 euros brutos mensuales.

Una vez revisado el expediente administrativo del proceso selectivo, el Departamento de Personal de la Concejalía del ramo pudo acreditar que Don AGH no se hallaba en posesión del título de Grado o equivalente para acceso al grupo A2 en el plazo señalado en las bases de convocatoria, lo que, al margen de los posibles efectos invalidantes del proceso selectivo que puedan llegar a declararse en el procedimiento administrativo de nulidad ya iniciado, ha podido producir un menoscabo en los fondos públicos de la corporación de VV constitutivo de un alcance de dichos caudales por el importe indebidamente abonado a Don AGH que, a fecha de este escrito, asciende a 19.100 euros, a expensas de la posible extinción de su relación estatutaria con el Ayuntamiento.

Del señalado alcance resulta responsable contable el Alcalde de la Corporación, en su calidad de ordenador de pagos, sin perjuicio de las responsabilidades y de la obligación de Don AGH, en tanto perceptor de las nóminas, de devolver las cantidades irregularmente devengadas.

Asimismo deberían responder subsidiariamente la persona o personas responsables del Departamento de Personal del ayuntamiento, quienes, mediante una actuación dudosamente diligente, no advirtieron a tiempo acerca de la ausencia del requisito de titulación de Don AGH con anterioridad a su nombramiento y posterior toma de posesión, conforme lo establecían las bases de convocatoria, lo que propició que el mismo pudiera incorporarse a la corporación en calidad de funcionario de la misma con plenitud de derechos y obligaciones.

Sexto.- A Don BCM, concejal de Hacienda del ayuntamiento de VV, le fueron abonados, con cargo a la partida de gastos de representación y protocolo del presupuesto municipal de 2021, gastos por un importe total de 2.460 euros correspondientes a desplazamientos, comidas en restaurantes y aparcamientos en diversos

establecimientos hoteleros de sendas localidades situadas a 55 y 170 kilómetros, respectivamente, del municipio de VV. A efecto de su liquidación, el mismo presentó en los servicios municipales competentes, justificantes correspondientes a dichos desplazamientos, así como diversas facturas de restaurantes y tickets de aparcamiento.

Si bien en el presupuesto de la Corporación local de VV existía una partida destinada a sufragar los gastos de representación y protocolo de sus miembros, inherentes o relacionados con el desempeño del cargo corporativo, Don BCM, no acompañó documentación alguna que justificara el carácter institucional de las comidas y la finalidad de interés público de las mismas. Pese a que es condición indispensable para el devengo y abono de tales gastos, que los miembros de la corporación que incurran en ellos justifiquen puntualmente que los mismos se han producido en desarrollo de su mandato o cargo representativo (carácter institucional de los eventos o finalidad de interés público para la corporación), el Secretario-Interventor municipal no formuló reparo alguno ni hizo advertencia sobre la procedencia de los mismos.

Estos abonos de gastos carentes de justificación vulneran las previsiones tanto del presupuesto municipal para 2021 como el TRLRHL, dando lugar a un alcance en los fondos públicos municipales por importe de 2.460 euros de principal.

Son responsables contables directos de dicho alcance, además de BCM, quien no justificó debidamente los gastos en que incurrió, a pesar de conocer, como concejal de Hacienda del consistorio, que los mismos debían necesariamente estar vinculados al ejercicio del cargo corporativo, Don AAF, Alcalde del ayuntamiento de VV, en su condición de ordenador de los pagos, y Don MFA, Secretario-Interventor local, quien no emitió reparo alguno a su pago. Y también es responsable contable subsidiaria, Doña PFF, Tesorera municipal, quien ejecutó las órdenes de pago de dichos gastos con cargo a los fondos de la corporación.

Los hechos descritos en los apartados segundo, tercero y sexto de este escrito fueron también objeto de denuncia ante la Jurisdicción penal, que se sustanció como querrela en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres. La existencia de estas actuaciones penales fue notificada a las mercantiles SO, S.L. y ZX, S.A. y a las personas que durante los ejercicios concernidos ocuparon los cargos de Alcalde, Secretario-Interventor y Tesorera del Ayuntamiento de VV.

A la vista de los hechos expuestos y de los razonamientos jurídicos puestos de manifiesto en este escrito, se solicita de los órganos competentes de la jurisdicción contable:

1º.- Que se admita a trámite el presente escrito, y, tras los trámites oportunos, se incoe el procedimiento de reintegro por alcance en exigencia de las responsabilidades contables que correspondan, así como que se dicte sentencia en que se declare la existencia de daño o perjuicio en los fondos públicos municipales del ayuntamiento de VV por un importe total de ciento veintitrés mil doscientos diez euros (123.210 €) de principal.

2º.- Asimismo que se condene como responsables contables directos y subsidiarios de dicho alcance a las personas físicas y jurídicas que se establecen en los hechos denunciados en este escrito, que deberán reintegrar a las arcas públicas locales el referido principal más los intereses que correspondan a la parte concreta del alcance que les resulte imputable.

3º.- Que se condene a las personas que ocupaban los cargos de Alcalde, de Secretario-Interventor y de Tesorera de la Corporación de VV, en las fechas en que se produjeron los hechos, a una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante un periodo de cinco años.

4º.- Que se imponga a la mercantil ZX, S.A. una multa pecuniaria por importe de al menos 35.000 euros a que asciende la cantidad obtenida y no justificada, y ello, sin perjuicio de la obligación de reintegro de dicha cantidad más intereses conforme al artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y pérdida durante un plazo de cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones Públicas u otros entes públicos.

El escrito presentado por Don Evencio C.D. en su propio nombre y derecho, fue asignado por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas a la Consejera de Cuentas a quien, por el turno establecido, correspondió, y la misma, tras realizar las actuaciones previstas en el artículo 56.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, dictó Auto con fecha 29 de noviembre de 2021, admitiendo dicho escrito a trámite como acción pública contable y proponiendo el nombramiento de Delegado-Instructor para la práctica de las actuaciones previstas en el artículo 47 de la misma ley.

Este Auto fue notificado a Don Evencio C.B., al Ayuntamiento de Valdenovillo del Valle y al Ministerio Fiscal.

La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas designó, por resolución de fecha 18 de diciembre de 2021, Delegado-Instructor para la práctica de las actuaciones previas previstas en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Tras las diligencias de averiguación oportunas, el Delegado-Instructor practicó **liquidación provisional de alcance** en fecha 1 de marzo de 2022, fijando previa y provisionalmente como hechos constitutivos de dicho alcance los relativos a la subvención otorgada a la mercantil ZX, S.L., salvo un importe de 6.000 euros correspondientes a la financiación del campeonato de fútbol sala que no pudo ser organizado, es decir, un perjuicio por 29.000 euros, los derivados de la percepción indebida de nóminas, cuantificando el daño en 19.100 euros y el menoscabo originado por abono injustificado de gastos de representación y protocolo por importe de 2.460 euros. Por los referidos hechos, declaró previa y provisionalmente un alcance de fondos públicos en el Ayuntamiento de VV por un importe principal de cincuenta mil quinientos sesenta euros (50.560 €).

Con fecha 11 de marzo de 2021, dictó **providencia de reintegro, depósito o afianzamiento**, a fin de que los presuntos responsables reintegraran, depositaran o afianzaran el importe del alcance, con apercibimiento de que, en caso de no atender el mismo, se procedería al embargo de sus bienes conforme al artículo 47.1 letra f) de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Frente a dichas acta de liquidación y providencia de requerimiento, la representación legal del Alcalde de la Corporación interpuso en plazo **recurso del artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas**, por el que solicitaba la revocación de las resoluciones impugnadas así como la suspensión del requerimiento de pago, depósito o afianzamiento en tanto se resolviera dicho recurso.

Alegó indefensión causada por dos motivos:

Primero: Ausencia de responsabilidad contable del recurrente al no haber participado en los hechos, ya que, como ordenador de pagos, se limitó, en los tres los pagos controvertidos por los que se le atribuye aquella, a cumplir sus funciones de clavero del ayuntamiento, una vez tramitados y fiscalizados los expedientes de gasto por los órganos competentes.

Segundo: Por haber denegado el Delegado-Instructor sin motivación alguna la práctica de diligencias solicitadas por el mismo en trámite de alegaciones a la liquidación provisional. Concretamente y, en aras del esclarecimiento de los hechos y determinación de los presuntos responsables, solicitó al órgano instructor que requiriera al ayuntamiento de VV la remisión de certificado/s de los Plenos corporativos celebrados en el ejercicio 2021, que justificarían, en unión de los documentos que obran en las indicadas actuaciones previas, la percepción de las indemnizaciones aprobadas y abonadas en su día al Concejal de Hacienda del consistorio, en concepto de dietas correspondientes a gastos de representación y protocolo.

El Acta de Liquidación provisional, respecto a la primera alegación, señaló que el presunto responsable planteaba una cuestión de fondo que, en su caso, exclusivamente podría ser resuelta por los órganos de la jurisdicción contable competentes.

Y, en cuanto a la segunda alegación, el Delegado-Instructor literalmente concluyó: “Que la solicitud de requerimiento de certificado/s de los Plenos de la Corporación formulada por el Alcalde de VV, *lógicamente, no es objeto de tramitación por esta Instrucción Delegada, sin perjuicio de que en la fase jurisdiccional contable correspondiente, las partes en el procedimiento puedan aportar todos los elementos de prueba que consideren oportunos*”.

Una vez concluidas las actuaciones previstas en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y resuelto el recurso formulado contra la Liquidación provisional y la providencia de requerimiento de pago, depósito o afianzamiento, se pasaron las actuaciones al Consejero de Cuentas para la tramitación del procedimiento de reintegro por alcance correspondiente.

Don Evencio C.D., mediante escritura pública, designó abogado con poder de representación, quien formuló, mediante escrito de fecha 4 de julio de 2021, demanda fundamentada en los mismos hechos contenidos en su escrito de denuncia, contra:

- El Alcalde y el Secretario-Interventor del ayuntamiento de VV, en concepto de responsables contables directos de los hechos, así como contra la Tesorera municipal, como responsable contable subsidiaria.
- Y la declaración de responsabilidad contable directa de la mercantil ZX, S.L. como perceptora de la subvención no justificada, de Don BCM, concejal de Hacienda del ayuntamiento, como destinatario de los pagos por gastos de representación injustificados, y de responsabilidad contable subsidiaria del responsable o responsables del Departamento de personal de la corporación, quienes no advirtieron a tiempo la irregularidad que propició los abonos de nóminas a Don AGH.

Trasladado a los demandados el escrito de demanda, éstos presentaron escritos de contestación en el plazo legalmente estipulado:

Alegaciones formuladas por el Alcalde:

- **Falta de jurisdicción** del Tribunal de Cuentas respecto a los hechos descritos en los apartados primero, segundo y cuarto del escrito de denuncia, reproducidos en el escrito de demanda, que debería abstenerse de conocer de los mismos en favor de la Jurisdicción contencioso-administrativa cuyos tribunales son los únicos competentes para conocer de las posibles irregularidades producidas.

Tales hechos son los referidos a los posibles perjuicios a los fondos públicos municipales derivados de la irregular elaboración y aprobación de los presupuestos generales de la corporación de los ejercicios 2020 y 2021, de un fraccionamiento contractual contrario a la normativa de contratos del sector público y de la ya declarada por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa responsabilidad patrimonial del ayuntamiento.

- **Litispendencia** respecto a los hechos relativos a la tramitación irregular del presupuesto general del Ayuntamiento de VV correspondiente al ejercicio 2020, al hallarse pendiente de resolución el recurso contencioso-administrativo en su día formulado contra el Acuerdo del Pleno desestimatorio de la reclamación administrativa deducida contra el Acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto general de dicho año.
- **Prejudicialidad penal** respecto a los puntos segundo, tercero y sexto de su escrito de denuncia, reproducidos en su escrito de demanda, debiendo suspender la Consejera de Cuentas el procedimiento hasta que no se dicte resolución que ponga fin a las Diligencias Previas 37/2021, abiertas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, como consecuencia de posibles delitos de prevaricación y de malversación en la adjudicación de contratos menores y de fraude y exacción ilegal en el abono injustificado de gastos de representación.

- Excepción de ***falta de litisconsorcio pasivo necesario*** con la sociedad Servicios de Oficina, S.L., que debió ser traída al proceso como demandada junto con el Alcalde, el Secretario-Interventor y la Tesorera.
- ***Prescripción*** de la responsabilidad contable que pudiera declararse por los hechos del apartado cuarto del escrito de denuncia (indemnización abonada por el ayuntamiento en virtud de condena firme que declara su responsabilidad patrimonial dictada por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo), al haber transcurrido más de cinco años desde que se cometieron los hechos que podrían originarla.

En todo caso, reitera su alegato ya expuesto en el recurso del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, es decir, que se limitó a cumplir sus funciones de ordenador de pagos en los expedientes previamente fiscalizados por la Intervención local sin otra participación en los hechos, por lo que no debería atribuírsele responsabilidad contable alguna.

Alegaciones formuladas por el Secretario-Interventor

Alega que como ya venía advirtiendo en ejercicios anteriores a 2020 y 2021, la insuficiencia de medios, tanto de recursos humanos como materiales, en su unidad, podría haber afectado directamente al cumplimiento adecuado de sus obligaciones profesionales.

Sin perjuicio de dicha limitación subraya que, conforme a los artículos 168 y 169 del TRLRHL, elaboró sendos informes económico-financiero favorables a la aprobación de los presupuestos generales corporativos en ambos ejercicios, en los que expuso las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de éstos para el cumplimiento de los gastos.

Por ello, del quebranto que pudiera haberse producido en la hacienda municipal por irregularidades en la presupuestación, sólo habrían de responder, en su caso, los órganos que, en ejercicio de sus competencias, dictaron o aprobaron los correspondientes actos administrativos, es decir, el Pleno de la Corporación de VV que aprobó los presupuestos (definitivo de 2020 y provisional de 2021), y el Alcalde de la misma quien firmó dichos presupuestos y formó las correspondientes memorias anexas.

Respecto a la responsabilidad contable que se le atribuye por los expedientes de contratación (que podría haber supuesto un fraccionamiento contractual legalmente prohibido), y de la liquidación de gastos de representación y de protocolo no justificados, razona que, conforme al artículo 4 del RD 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en cumplimiento estricto de sus funciones, en ellos se limitó a constatar la existencia de crédito y su adecuación a los gastos incurridos en cada caso, por lo que no estimó procedente la emisión de reparo alguno.

Alegaciones formuladas por la Tesorera municipal

Falta de legitimación pasiva en el procedimiento de reintegro por alcance:

Respecto a los hechos que se le imputan, alega que en los expedientes de gasto concernidos, se limitó a cumplir su función de realizar los pagos de fondos de la entidad conforme al artículo 5 del RD 128/2018, de 16 de marzo y 196 TRLRHL, consistente en ejecutar materialmente las órdenes de pagos que llegaron a Tesorería firmadas por el Alcalde de la corporación que, previamente habían sido fiscalizadas de conformidad por el Secretario-Interventor municipal, y una vez constatada la existencia de fondos. Tal función se ceñía a comprobar que los mandamientos de pago librados o presentados habían sido ordenados por el órgano competente (el Alcalde-Presidente), sin que constaran reparos de la Intervención, circunstancias ambas que concurrían en los pagos materializados, por lo que estaba obligada a cumplir dichas órdenes de pago recibidas.

Invoca además la doctrina de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que recalca la limitación de la competencia de la Tesorería municipal al pago material previa comprobación de que se ordenó el mismo por órgano competente y de su preceptiva intervención, de modo que en el caso de los pagos de gastos de representación y protocolo, si llegara a estimarse la pretensión de declarar la ausencia de prueba alguna que justificara la necesidad o interés público de los gastos realizados (desplazamientos, restauración, parking), la posible responsabilidad contable en ningún caso debería atribuírsele a la misma como Tesorera del ayuntamiento.

Alegaciones formuladas por la sociedad mercantil ZX, S.L.

Alega que conforme a las bases de la subvención cumplió su obligación como beneficiaria consistente en organizar todos los actos socio-culturales programados por la Corporación de VV con ocasión de las fiestas patronales excepto el torneo de fútbol sala, que no pudo celebrarse por motivos ajenos a la empresa organizadora. En consecuencia, si bien es cierto que no pudo presentar en plazo, por razones de acumulación de tareas, la documentación justificativa de la subvención, (aprovecha para decir que se compromete a presentarla a la mayor brevedad), debe considerarse que es público y notorio que las actividades previstas por el Ayuntamiento que motivaron la concesión de la subvención pudieron celebrarse en las fechas establecidas y a satisfacción de la Corporación y de los vecinos del municipio.

Por ello, no procede la exigencia de responsabilidad contable alguna, cuando, además, no ha podido acreditarse daño o menoscabo objetivo alguno en los fondos públicos locales derivado de las actividades que fundamentaron el otorgamiento de la subvención, lo que es relevante al ser este uno de los elementos esenciales, (el objetivo), para tal exigencia conforme a reiterada doctrina de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

Alegaciones formuladas por BCM, Concejal de Hacienda

Falta de legitimación pasiva: Conforme al artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la responsabilidad contable sólo puede exigirse a los cuentadantes, es decir, a aquellos que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, así como a los perceptores de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público. Alega que, a pesar de ocupar la Concejalía de Hacienda del ayuntamiento, no puede por ello atribuírsele tal condición de cuentadante, ya que carecía de competencia sobre la fiscalización previa de los gastos, que incumbía al Interventor local, así como acerca de la ordenación de los pagos, que correspondía al Alcalde, por lo que no debe atribuírsele responsabilidad contable alguna derivada de la percepción de unas dietas por desplazamientos, manutención y otros conceptos asociados al ejercicio de sus funciones en la corporación, máxime cuando los expedientes de gasto se tramitaron sin haber sido reparados por el órgano de la Intervención municipal.

Alegaciones del Jefe del Departamento de personal del Ayuntamiento

Falta de legitimación pasiva y de jurisdicción: Conforme al artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y a la jurisprudencia que ha recaído sobre el mismo, alega que carecía de la condición de cuentadante, (ni era ordenador de pagos ni tenía atribuida función alguna de control sobre la actividad económico-financiera de la Corporación), por lo que la pretensión de que haya de responder contablemente ante la jurisdicción contable debería ser rechazada. Razona que la unidad de Recursos Humanos se limitó a tramitar, en ejercicio de sus competencias administrativas, el expediente de personal de Don AGH, observando, con posterioridad a su ingreso en el Ayuntamiento, y al tiempo de revisar la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de convocatoria del proceso selectivo, que el mismo carecía de la titulación necesaria.

De hecho, se encuentra en tramitación un procedimiento administrativo de nulidad del controvertido proceso selectivo cuya conformidad a derecho habría de ser enjuiciada, en su caso, por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

A la vista de los hechos descritos se solicita del Sr. Opositor:

1º.- Elaborar un informe jurídico razonando cuál o cuáles de los supuestos enunciados en el escrito de denuncia presentado por Don Evencio CD podrían dar lugar a la exigencia de responsabilidad contable, especificando, en este caso, si los hechos han podido ser constitutivos de alcances o de malversaciones de caudales o efectos públicos, o bien de otro tipo de infracciones distintas del alcance.

2º.- Redactar una propuesta de Auto estimando o no el recurso formulado al amparo de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, por la representación legal del alcalde del Ayuntamiento de VV, contra la Liquidación Provisiona practicada por el Delegado-Instructor el día 1 de marzo de 2022, y contra la posterior providencia de requerimiento, depósito o afianzamiento, de fecha 11 de marzo del mismo año.

3º.- Informar en derecho sobre si procede o no estimar cada una de las alegaciones formuladas en sus escritos de contestación a la demanda, por el Alcalde, el Secretario-Interventor local, la Tesorera municipal, la mercantil ZX, S.L., Don BCM, Concejal de Hacienda de la corporación, y por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del consistorio.